

Una firma más falta a los representantes republicanos para hacer la solicitud al Tricel:

# Crece presión sobre Orrego: Más consejeros evalúan sumarse a proceso de destitución

Desde el oficialismo, la diputada Musante dijo que “si los recursos públicos se utilizan para un fin distinto de los que la ley establece, se tiene que proceder a la destitución”, mientras Mulet calificó hechos como “graves”.

GUSTAVO CABELLO  
y ALEJANDRA ZUÑIGA

Luego de que un informe de la Contraloría General de la República (CGR) revelara que \$31 millones en asesorías para la gestión institucional del Gobierno Regional Metropolitano se habrían focalizado en la campaña a la reelección del actual gobernador Claudio Orrego, diversos congresistas han solicitado su destitución o la inhabilitación de sus funciones.

Desde el Partido Republicano, diputados y consejeros regionales ya anunciaron que van a comenzar un proceso de destitución en su contra. Para solicitar el proceso ante el Tricel se necesita un tercio del consejo, y como los republicanos son 11 de 34, solo les falta un voto.

“El uso de recursos de todos los chilenos para financiar campañas políticas que denunció la Contraloría en el caso de Claudio Orrego, ya tenía incluso antecedentes en otro dictamen reciente, a raíz de una denuncia que pusimos con el diputado Romero por casos en las comunas de Padre Hurtado, Estación Central y Quinta Normal”, dijo Juan Irarrázaval, diputado y subjefe de la bancada republicana.

A su juicio, “hay una constante inaceptable”, a raíz de los antecedentes que ligan a Orrego con el caso Procultura, por lo que cree debe pagar las consecuencias.

En la misma línea, dice que “el Gore no es una caja pagadora de campañas políticas y el gobierno regional no es propiedad de Claudio Orrego, ni él está por encima de la ley, de la institucionalidad ni del Estado de Derecho”.

“Como bancada republicana de diputados, hemos perseguido la responsabilidad penal de Claudio Orrego. Ahora, liderados por los gores republicanos,

pediremos su destitución”, sentenció.

Aunque Orrego justificó el jueves que las sesiones de *coaching* fueron “sacadas de contexto” y “que el 90% de ellas” hablan de fortalecer el trabajo en equipo y las “diferencias administrativas”, Cristián Araya, diputado y jefe de la bancada republicana, cree que, “claramente,

con estas sesiones de asesorías él buscaba favorecerse personalmente y no tienen ningún objetivo social, ni menos beneficiar a los santiaguinos”.

## Chile Vamos tiene la intención de sumarse

Al interior de Chile Vamos, cuentan, la idea de sumarse a la petición de destitución comienza a tomar fuerza. Aunque piensan que la información aportada por Contraloría es bien contundente, están a la espera de recibir los documentos completos para tomar una decisión.

Álvaro Bellolio (UDI), consejero regional por la Región Metro-

politana, espera que “el gobernador Claudio Orrego entregue respuestas claras en el próximo pleno y que se remitan todos los antecedentes solicitados”, y dice que el Tricel o la Fiscalía deben determinar “responsabilidades en el caso”.

Bellolio señala que, como partido, “buscaremos que se aclaren todos los hechos frente a la ciudadanía y se tomen las medidas que sean necesarias si hay irregularidades”.

Por otra parte, el



diputado Andrés Longton (RN) recalca que “hay que revisar los antecedentes por completo, pero que a primera vista son lo suficientemente contundentes para pedir su destitución”, comentó a “El Mercurio”.

El congresista es enfático en decir que “hay una infracción grave a la probidad comprobada y elementos que Orrego quiso eliminar”.

Longton se refiere a un oficio dado a conocer por Ex-Ante, el cual evidenciaría que Orrego habría intentado excluir información del informe de la CGR relativa a las minutas de la asesoría, porque,

información personal de los funcionarios.

A criterio de Longton, el gobernador “no quería que esto se supiera y es una clara intención de ocultamiento”, declaró.

## Oficialismo pide investigación a fondo

Desde el oficialismo piden que los hechos se investiguen, pero que si luego de eso se comprueban las irregularidades, se pida la destitución.

“Si los recursos públicos se utilizan para un fin distinto de los que la ley establece, se tiene que proceder a la destitución de la autoridad correspondiente. Aquí no hay una lectura de partidos políticos de derecha, izquierda o de oposición, oficialismo”, argumentó la diputada Camila Musante (ind.-PPD).

El diputado y candidato presidencial, Jaime Mulet (FRVS), calificó los hechos como “graves”, y, a su juicio, si hubo algún desvío de recursos, pide que “se devuelvan las platas”.

Sobre la idea de los republicanos de sacar del cargo a Orrego, Mulet expone que “si un sector político pretende hacerlo, están en su derecho”, pero considera que “es importante hacer una investigación penal a fondo”.

## Fiscalía recibe resolución que le asigna caso Orrego, pero está a la espera de los antecedentes

Si bien ayer la Fiscalía Metropolitana Oriente recibió formalmente la resolución mediante la cual el jefe del Ministerio Público, Ángel Valencia, asigna el caso a esa jurisdicción, estaba aún a la espera de los antecedentes. Por eso, por ahora, sigue en suspenso la designación del persecutor que quedará a cargo de la causa y, a su vez, la dictación de las primeras diligencias.

Los antecedentes sobre eventuales irregularidades del Gobierno Regional Metropolitano le fueron remitidos a la Fiscalía Nacional por la Contraloría y se refieren a una asesoría para la gestión institucional del organismo, pero que a juicio del ente fiscalizador se habría enfo-

cado, al menos en parte, en la reelección del gobernador Claudio Orrego.

Tal consultoría tuvo un valor de \$31 millones y estuvo a cargo —entre abril y agosto de 2024— de Vera y Asociados S.A., del ciudadano español radicado en Chile hace más de 30 años Juan Vera Gil.

Según la página web de su agencia, es un “referente internacional en *coaching* político y experto en *coaching* en el ámbito del poder”.

Durante 2024, se realizaron 52 sesiones de *coaching* directivo con diversos funcionarios y servidores a honorarios del Gore, y con el gerente general de la Corporación de Desarrollo Territorial y Turismo de la Región Metropolitana, dice el informe.

Y aunque le fueron entregadas las minutas de 28 de ellas, agregó, se verificó que en 16 “se abordaron materias que no se relacionan con las funciones que el ordenamiento jurídico le ha encomendado a esa entidad regional”.

Algunos ejemplos incluidos son preguntas a los funcionarios como “¿cuáles son tus principales preocupaciones de cara a la campaña?” o “¿qué riesgos principales ves en el camino de este final de campaña?”, así como la frase “próximo día: campaña, campaña, campaña”, para futuras sesiones.

También se describen conversaciones entre el *coach* y los entrevistados, donde evidencian preocupación por la reelección

—incluyendo recolección de firmas o resultados de encuestas— e, incluso, una eventual candidatura presidencial.

“Ya me puse el chip de campaña y creo que tenemos espacios para hacerlo”, sostuvo una asesora del gabinete, mientras que otro funcionario planteó que “no hay suficiente coordinación (...) Hay que verlo también como Gore+Corporación”.

En un diálogo con otra asesora, el consultor detalló en la minuta que “Evelyn me cuenta que enero fue un ejemplo de despliegue (...). Creo que es bueno porque al ponerse en modo de campaña, si esta funciona le puede dar la campaña-adicción e ir alejándose más de la gestión”.